

**JUZGADO QUINCE (15) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**

[of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

ASUNTO: **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1° INSTANCIA**  
MEDIO DE CONTROL: **REPARACIÓN DIRECTA**  
DEMANDANTES: **JUAN SEBASTIÁN ÁVILA MAZUERA Y OTROS**  
DEMANDADO: **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**  
RADICACIÓN: **76-001-33-33-015-2020-00196-00**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado principal de la compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, manifiesto que, **REASUMO** el poder a mi conferido y encontrándome dentro del término legal, presento los respectivos **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**, solicitando desde ya, que se profiera **SENTENCIA FAVORABLE** a los intereses de mi representada, desestimando las pretensiones de la parte actora y declarando probada las excepciones propuestas al momento de contestar la demanda y el llamamiento en garantía:

**I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ALEGATOS.**

En la audiencia de pruebas llevada a cabo el día veintinueve (29) de agosto de 2023, se dio por concluido el periodo probatorio y se corrió traslado por el término común de diez (10) días hábiles a las partes para alegar de conclusión, los cuales se surtieron de la siguiente forma: 30 de agosto de 2023 (primer día), 31 de agosto de 2023 (segundo día), 01 de septiembre de 2023 (tercer día), 04 de septiembre de 2023 (cuarto día), 05 de septiembre de 2023 (quinto día), 06 de septiembre de 2023 (sexto día), 07 de septiembre de 2023 (séptimo día), 08 de septiembre de 2023 (octavo día), 11 de septiembre de 2023 (noveno día) y 12 de septiembre de 2023 (décimo y último día). Motivo por el cual, se concluye que el presente escrito de alegatos es radicado dentro del término previsto para el efecto.

**II. DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO PLANTEADA POR EL DESPACHO.**

En un juicioso y detallado análisis de los hechos de la demanda y de la oposición a los mismos por parte del extremo pasivo y la llamada en garantía, el despacho procedió a fijar el litigio en la audiencia inicial, en los siguientes términos:

*“Dilucidar si el Distrito Especial de Santiago de Cali es responsable patrimonialmente por los perjuicios*

*reclamados por los demandantes, con ocasión de los hechos ocurridos el 25 de agosto de 2018, en los cuales resultó lesionado el señor Juan Sebastián Ávila Mazuera en accidente de tránsito cuando conducía la motocicleta de placa ZIZ72D y estudiar si hay lugar al reconocimiento de los perjuicios reclamados. Así mismo, analizar el papel que juegan la compañía aseguradora llamada en garantía respecto de una eventual condena en contra de su llamante”*

### **III. ASPECTO PREVIOS RELATIVOS A LA “IMPUTACIÓN”.**

A grandes rasgos, se manifestó que el ente territorial demandado es administrativamente responsable de las lesiones padecidas por el señor Juan Sebastián Ávila Mazuera a título de falla en el servicio, por falta de mantenimiento de la malla vial de las vías que son de su competencia, porque según el dicho del apoderado del extremo activo, el 25 de agosto de 2018, se produjo un accidente a la altura de la Avenida 3 Norte con Calle 23 B Avenida las Américas del actual perímetro urbano de la ciudad de Cali, como consecuencia de un hueco que se encontraba en dicho tramo vial, el cual, le hizo perder el control del vehículo en el que se movilizaba la víctima (motocicleta de placa ZIZ72D). Finaliza indicando el apoderado del extremo activo que de haberse encontrado la vía en buenas condiciones para el 25 de agosto de 2018, o con señales de advertencia (señalización de peligro), el hecho dañoso por el cual se reclama la indemnización pretendida no se hubiera producido.

Señalados estos elementos, es válido afirmar que, conforme a las pruebas decretadas y practicadas, se arriba a la conclusión temprana: **i)** que no se acreditó la falla en el servicio deprecada, esto es, la falta de mantenimiento de la malla vial y la falta de señalización respecto de la vía identificada con la nomenclatura Avenida 3 Norte con Calle 23 B Avenida las Américas del actual perímetro urbano de Cali, para el 25 de agosto de 2018 a las 11: 55 (día y hora en el que al parecer se produjo el accidente de tránsito), **ii)** que no se probó el nexo de causalidad entre la falla en el servicio deprecada y el daño sufrido por la víctima directa, y **iii)** que no se demostró, a través de los medios probatorios legalmente permitidos, los supuestos perjuicios materiales causados. En conclusión, el litigio fijado deberá ser resuelto de manera negativa, por los motivos que se pasan a esbozar en detalle.

### **IV. ALEGATOS FRENTE A LA EVENTUAL DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.**

**A). VALORACIÓN PROBATORIA: NO SE ACREDITÓ LA FALLA EN EL SERVICIO ENDILGADA, NI SE PROBÓ EL NEXO DE CAUSALIDAD-NO HAY PRUEBA DE QUE EL ACCIDENTE HUBIERA SIDO CONSECUENCIA DIRECTA Y EXCLUSIVA DE UN HUECO EN LA VÍA.**

Con el debate probatorio no quedó establecida la existencia de un hueco a la altura de la Avenida 3 Norte con Calle 23 B Avenida las Américas del actual perímetro urbano de Cali para el 25 de agosto de 2018, ni mucho menos el último elemento de la responsabilidad (nexo de causalidad

entre el hecho dañoso y la falla en el servicio deprecada), toda vez que, no se logró acreditar de manera fehaciente, que de existir dicho hueco a la altura de la referida vía, el mismo hubiese sido el productor único y exclusivo del accidente de tránsito y las lesiones que se reclaman, y no otro factor externo imputable a la propia víctima o a un tercero.

El apoderado actor estaba en el deber de probar durante el curso del proceso los elementos estructurales de la responsabilidad, que como se anticipó en el escrito de contestación a la demanda y al llamamiento en garantía, en materia administrativa son el daño y la imputación. Estos dos elementos estructurales nunca se presumen y deben estar debidamente acreditados por la parte actora. A pesar de haberse realizado a lo largo del proceso una desestimación de la cuantía de los perjuicios en la objeción a las pretensiones, y de manifestar que no existe prueba para la consolidación de los mismos, no desconoce este extremo de la Litis los traumas físicos sufridos por el señor Juan Sebastián Ávila Mazuera, sin embargo, en lo que respecta a la imputación, no hay prueba que permita su estructuración, ni siquiera indiciaria.

Para reforzar lo anterior, de antaño la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha precisado lo siguiente: *“La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la Sala, de la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90 de la Carta. Cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración se constituye en un elemento **que debe ser acreditado por el demandante**. Así lo ha repetido esta misma Sala”*. (Negrita adrede).

La imputación tiene unas etapas que no pueden desconocerse al momento de intentar atribuir un daño, por lo que es claro que no hay suficientes pruebas en el expediente que permitan concluir la estructuración de responsabilidad en cabeza del Distrito Especial de Santiago de Cali y, por consiguiente, de la entidad aseguradora que represento. Para partir de la base de atribuir responsabilidad, el demandante debió determinar desde la perspectiva causal qué conducta, acción u omisión, fue la que produjo el daño.

El demandante se refirió a la responsabilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali, al manifestar que *“... en el transcurso del pleito judicial e incidente tuvo una causa directa y eficiente: el mal e irregular estado de la malla vial, el cual desencadenó que JUAN SEBASTIAN AVILA MAZUERA perdieran la estabilidad y control de su cuerpo, e impactaran contra el pavimento, con el nefasto desenlace ya conocido”*. No obstante, estas son apreciaciones subjetivas de las que no hay prueba alguna en la medida que no están acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el aparente accidente de tránsito. Esa hipótesis de responsabilidad fue construida arbitrariamente por la parte demandante para fundamentar la legitimación por pasiva de la entidad demandada, omitiendo prueba alguna que permitiera atribuir a esta entidad el daño generado.

Es importante precisar en este punto que, si no hay ningún parámetro que vislumbre una falla por parte del Distrito Especial de Santiago de Cali, no hay ningún fundamento jurídico para que la sociedad que represento intervenga en calidad de llamado en garantía dentro de la presente acción. La vinculación que se hace a mi prohijada es en razón al contrato de seguro que tiene suscrito con la entidad territorial, por tanto, solo podría establecerse una condena contra la aseguradora en el evento de que se declarara la responsabilidad extracontractual de la tomadora, teniendo en cuenta el alcance del clausulado contenido en el contrato de seguro.

Siguiendo con lo dicho en párrafos anteriores, el extremo activo y su apoderado desconocieron durante todo el curso del proceso la teoría de la causalidad adecuada, al no probar cuál fue la acción u omisión del Distrito Especial de Santiago de Cali presente en el mundo fenoménico que contribuyó a causar las lesiones del señor Juan Sebastián Ávila Mazuera. Bastó con un análisis superfluo del apoderado demandante para señalar inmediatamente al ente territorial como responsable del hecho dañoso, desconociendo así lo determinado por la jurisprudencia del Consejo de Estado: *“La demostración del mal estado de la vía no es, por sí sola, suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño, pues esa prueba debe acompañarse de la acreditación del nexo causal entre este y la acción u omisión en que pudo haber incurrido la administración en su deber de mantenimiento de la malla vial”*<sup>1</sup>.

En el caso concreto, no se encuentran acreditados los elementos constitutivos de la falla en el servicio por parte de la entidad demandada, toda vez que, si bien el apoderado del extremo activo arguye la existencia de un accidente de tránsito ocurrido el 25 de agosto de 2018 sobre la altura de la Avenida 3 Norte con Calle 23 B Avenida las Américas del actual perímetro urbano de la ciudad de Cali, no se demostró dentro del plenario que éste se hubiera materializado por la inobservancia a un deber jurídico: falta de señalización o conservación de la vía, por parte de la Administración Municipal. En este sentido, no le resulta imputable al ente territorial el daño aparentemente sufrido por el señor Juan Sebastián Ávila Mazuera, habida cuenta que, lo manifestado en el líbelo de la demanda, en cuanto a la falla en el servicio y el factor imputación, no se encuentra acreditado en el plenario a través de los medios probatorios legalmente permitidos.

Por otro lado y no menos importante, se echa de menos la existencia en el acervo probatorio del informe policial de accidente de tránsito que diera cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente. Cuando ocurre un accidente de tránsito se levanta un informe de tránsito con el fin de esclarecer los hechos y pormenores, pero sobretudo, dejar constancia de lo sucedido. Por ello, se considera a dicho informe como un elemento de juicio que permite realizar un análisis del esquema fáctico debido a que precisa las causas del impacto, la identificación de los involucrados, el lugar, la fecha y hora en que ocurrió el hecho, el estado de la vía, la huella de frenado, grado de visibilidad, colocación del vehículo, descripción de los daños y lesiones, testigos presenciales, entre otros asuntos.

---

<sup>1</sup> C. E. Sec. Tercera. Sent. 08001233100019980066301, feb. 08/2017. C.P. Hernán Andrade.

En este sentido, si bien el testigo Gustavo Adolfo Torres Urbano en la audiencia de pruebas celebrada el 29 de agosto de 2023, refirió que él era compañero de trabajo de la víctima directa, que para el día del accidente los dos iban en sus respectivos vehículos (motocicletas) con destino a entregar un domicilio, cuando iban atravesando el lugar donde ocurrió el accidente, él pudo visualizar que el aquí demandante perdió el control de su vehículo, no es menos cierto también que dicha declaración, en ningún caso, reemplaza el contenido y alcance que hubiese producido el informe policial de accidente de tránsito, de haber existido, pues nada legítima, más allá del dicho de la víctima directa y su apoderado, realmente, que el señor Gustavo Adolfo Torres Urbano hubiera ostentado la calidad de testigo presencial para la época de los hechos.

De haber existido dicho informe policial de accidente de tránsito se podía convalidar si el señor Gustavo Adolfo Torres Urbano, en efecto, fue testigo presencial del accidente, pero como este medio de prueba no existe, tal como se confiesa en los hechos de la demanda, queda mucha incertidumbre de cara a este tópico, habida cuenta que, uno de los puntos contenidos en el informe tiene como propósito relacionar los testigos presenciales del accidente.

Sobre la importancia de acreditar las circunstancias que rodean un accidente de tránsito, la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente:

*“Era indispensable, en consecuencia, escrutar, a través del acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripción del lugar de la colisión (vgr. la anchura o uniformidad de la vía, topografía y señales de tránsito del sector circundante antes y después del punto de colisión, el estado del tramo vial); (ii) los factores de importancia en el iter del choque (hora, condiciones atmosféricas, características del flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicación de los vehículos luego del suceso, así como su examen mecánico, entre ellos, las señales acústicas y luminosas, las condiciones de los neumáticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisión); (iii) **los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados** (averiguado mediante las versiones de éstos o mediante testigos presenciales del hecho); y (iv) **las conclusiones sobre las comprobaciones fácticas acerca de las razones que provocaron el accidente**”.* (Negrita adrede).

Arribando la anterior cita jurisprudencial al caso concreto, encontramos que, si bien con la demanda se aportaron una serie de imágenes fotográficas para “demostrar” las condiciones de la vía, a las mismas, en ningún caso, se les podrá asignar valor probatorio alguno a la hora de resolver el presente juicio de responsabilidad. Lo anterior, en la medida que no existe certeza sobre el momento exacto en que fueron tomadas, así como tampoco sobre su autenticidad. Para esta parte de la Litis no es clara la representación de los hechos que se pretende demostrar con los mencionados documentos representativos, pues existen serias dudas: i) acerca de la fecha de su toma, ii) si fue en la dirección a que hace alusión el extremo demandante y iii) acerca de su contenido, el cual

<sup>2</sup> CSJ, Cas. Civil, Sent. Radicación 73001-31-03-001-2014-00034-01, sep. 20/2019, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

puede ser alterado si no se conserva su custodia, aunado a que no hay forma de determinar su origen y creador. Sobre el valor fotográfico, el Consejo de Estado en sentencia reciente determinó:

*“[L]as fotografías por sí solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden probarse, con lo cual, el valor probatorio que puedan tener no depende únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición.*

*En otras palabras, para que las fotografías tengan connotación probatoria y puedan ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, se debe tener certeza sobre la persona que las realizó y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, lo que normalmente se devela a través de otros medios complementarios. De esta forma, la autonomía demostrativa de dichos documentos se reduce en la medida que se requieran otros medios de convicción que las soporten<sup>3</sup>.”* (Negrita adrede).

Así pues, con la ausencia de medios probatorios que den cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el accidente, claramente se le resta valor probatorio a las aludidas fotografías, en el entendido que lo que se pretende representar genera incertidumbre con relación a los hechos realmente materializados, por la ausencia de otros medios de convicción que las soporten. En tal virtud, como se adelantó en párrafos anteriores, le correspondía a la parte demandante acreditar la prueba de esa causa eficiente y determinante en la producción del resultado dañoso, dado que, el trabajo argumentativo realizado en la demanda ha suprimido esa carga al pretender presumir la causalidad.

En estos términos, con el material probatorio allegado al expediente, se denota que la parte actora se limitó única y exclusivamente a probar el estado de salud de la víctima directa, pero no la existencia del hueco en la vía o el mal estado de la misma, y mucho menos, el nexo de causalidad entre este elemento (hueco en la vía) y el daño causado (lesiones físicas). Por todo esto, no hay prueba alguna, si quiera indiciaria, que permita objetivizar la atribución causal a la entidad demandada, pues si no se configuró el argumento de que la demandada incidió en el resultado dañoso, desaparece la causa eficiente para que el juez determine la responsabilidad.

Una vez acreditado que no existe causalidad material, menos puede concluirse que existe causalidad jurídica ya que, atendiendo al régimen de imputación de falla probada en el servicio, no hay prueba en el proceso del incumplimiento obligacional a cargo del Distrito Especial de Santiago de Cali. En conclusión, al no configurarse los elementos estructurales de la responsabilidad, conforme a lo esbozado, no hay fundamento para declarar la misma y condenar a la llamada en garantía por esta razón.

<sup>3</sup> C.E., Sec. Tercera (2018). Sent. 05001233100020030399301, feb. 14/2018. C.P Ramiro Pazos Guerrero.

## B). AUSENCIA DE PRUEBA DE LOS PERJUICIOS MATERIALES PRETENDIDOS.

En lo concerniente al **LUCRO CESANTE**, el apoderado de los demandantes someramente indica que la víctima directa, antes de la ocurrencia del hecho dañoso, se desempeñaba como repartidor de la plataforma digital “*rappi*”, sin aportar prueba alguna que permita soportar su dicho. Bajo esa perspectiva, resulta entonces abiertamente injustificado cualquier valor económico pretendido en favor de la parte solicitante por el rubro aquí estudiado, siendo consecuencia directa de lo anterior, la imposibilidad de que prospere lo aquí pedido.

Como fundamento de lo anterior, es pertinente hacer mención a que el Honorable Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera – en Sentencia de Unificación con fecha del 18 de julio de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera (exp. 44572), precisó que en lo que atañe a la liquidación del lucro cesante, es preciso eliminar la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos fundamentales del daño, esto es, la certeza. Lo anterior, en tanto que, para dicha Corporación, se puede incurrir, al no dudar de su existencia, en el desatino de indemnizar un perjuicio inexistente, incierto o eventual. En este tenor lo señaló el fallo:

**“1.1. Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante**

2.1.2 ***Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno (artículos 177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.).***

(...)

**2.2.2 Ingreso base de liquidación**

(...)

**El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente acreditado** y para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros contables que debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los ingresos percibidos por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes estén obligados a expedirlas, las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio siempre que satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, o que se haya allegado cualquier otra prueba idónea para acreditar tal ingreso.” (Subrayado del texto original).

En consecuencia, a falta de prueba suficiente que permita demostrar la actividad laboral productiva del lesionado, se traduce que no puede generarse un pago a cargo de la entidad territorial demandada sobre supuestos fácticos que no han sido corroborados. Como sustento de lo anterior, esto es, que la víctima directa no contaba con una relación laboral para la época de los hechos, es su propia confesión al rendir interrogatorio de parte en el proceso, cuando contestó que él, para dicha época, no cotizaba al sistema de seguridad social integral.

Por lo comentado, explicado y probado, sin un contrato laboral o prueba que demuestre los ingresos reales que percibía la víctima antes de la ocurrencia del accidente, no podrá ser reconocido valor

alguno por concepto de lucro cesante. Aunado a ello y como argumento de cierre, debe aclararse que dicho perjuicio no fue liquidado conforme a las fórmulas financieras establecidas para tal efecto, pues no se conoce el periodo indemnizable, el valor de la renta, entre otras cosas. En suma, no se puede reconocer un perjuicio irreal, que no es cierto y que de contera, no se encuentra debidamente cuantificado.

## **V. ALEGATOS RESPECTO DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.**

En este acápite se desarrollarán los aspectos relativos a la vinculación realizada a mi procurada, respecto al tenor de la póliza utilizada como fundamento del llamamiento en garantía:

### **A). INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE MI PROCURADA POR NO HABERSE REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 420-80-994000000054.**

Huelga resaltar que en este caso no existe obligación indemnizatoria a cargo de mí representada, respecto de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000054-Anexo 0, por cuanto no se realizó el riesgo asegurado y amparado en la misma. El riesgo asegurado en el contrato de seguro no es otro que la “*Responsabilidad Civil Extracontractual*” en que incurra el Distrito Especial de Santiago de Cali, asegurado de acuerdo con la legislación colombiana. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000054-Anexo 0, cuya vigencia corrió desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019, entrará a responder si y solo si el asegurado, en este caso el Distrito Especial de Santiago de Cali es declarado patrimonialmente responsable por los daños irrogados a “*terceros*”, siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que enerve los efectos jurídicos del contrato de seguro. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad civil constituirá el “*siniestro*”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del Código de Comercio).

De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta lo descrito en el líbello de la demanda, así como los medios probatorios aportados al plenario, se tiene que, la parte demandante no ha logrado acreditar los elementos axiológicos de la responsabilidad pretendida. En consecuencia, no se logra estructurar una responsabilidad en cabeza del asegurado ni de su llamada en garantía, esto es, no se realiza el riesgo asegurado como condición *sine qua non* para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, le pudiera corresponder a la aseguradora al haberle sido trasladado el riesgo.

Se concluye, que al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad civil extracontractual, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado por la Póliza de Seguro de

Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000054-Anexo 0, cuya vigencia corrió desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019, que sirvió como sustento para llamar en garantía a mi representada. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de la compañía aseguradora.

**B). EN TODO CASO, LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SE DEBE CEÑIR AL PORCENTAJE PACTADO EN EL COASEGURO//INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD PASIVA ENTRE LAS COASEGURADORAS.**

Es importante mencionar, sin que tal manifestación pueda llegar a ser tenida en cuenta como aceptación alguna de responsabilidad por parte de mí representada o que pueda ser valorada en detrimento de los argumentos expuestos anteriormente, que conforme a las estipulaciones concertadas en el contrato de seguro que sirvió de fundamento para la vinculación de mi representada, los riesgos trasladados fueron distribuidos entre las siguientes compañías: Aseguradora Solidaria de Colombia E.C., Chubb Seguros Colombia S.A., SBS Seguros S.A. y HDI Seguros:

Ahora Al	INTERMEDIARIO			COMPAÑÍA			VALOR ASEGURADO
	NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑÍA	%PART		
	PROSEGUROS	181	30.00	CHUBB SEGUROS COLOMBIA	30.00		
	DELIMA MARSH S.A.	301	35.00	SBS	25.00		
	WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGURO	1479	35.00	HDI SEGUROS	10.00		

En ese sentido, existiendo coaseguro, es decir estando distribuido el riesgo entre las compañías de seguros mencionadas, debe tenerse en cuenta que en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar en virtud del contrato de seguro mencionado, la responsabilidad de cada una de las aseguradoras está limitada al porcentaje antes señalado, pues no se puede predicar nunca entre ellas una especie de solidaridad. Lo anterior, conforme a lo preceptuado en el artículo 1092 del Código de Comercio, el cual sostiene:

*“(…) En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad. (…)”* (Subraya adrede).

Lo estipulado en la norma en cita, se aplica al coaseguro por estipulación expresa del Art. 1095 Ibídem, que establece lo siguiente:

*“(…) Las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro. (…)”* (Subraya y negrita adrede).

Sobre el coaseguro, el Consejo de Estado en sentencia reciente, determinó que:

*“(…) En atención al coaseguro existente, se precisa que la llamada en garantía reembolsará únicamente el 55% de lo que llegue a pagar el Municipio de Santiago de Cali, pues, en estos eventos, **los distintos aseguradores deben responder con sujeción a la participación que asumieron al momento de la celebración del contrato sin que exista solidaridad** de conformidad con el artículo 1092 del Código de Comercio (…)”<sup>4</sup> (Negrita adrede).*

En este punto, resulta necesario aclarar que entre las coaseguradoras no existe solidaridad en la acreencia eventual por la pasiva, así lo ha entendido el Consejo de Estado en sentencia del 26 de enero del 2022, expediente 25000232600020110122201 (50.698) con ponencia del consejero Freddy Ibarra Martínez. Miremos los considerandos:

*“Es claro para la Sala que las obligaciones que asumen las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una de ellas y no existe en este caso solidaridad legal ni contractual entre ellas, de modo que la contratista violó el debido proceso a Segurexpo SA al negar la vinculación del coasegurador Colpatria SA al trámite administrativo e imponerle, sin fundamento jurídico admisible, la carga de responder por la obligación de un tercero que no fue citado al proceso y que, en tal virtud, carece de interés para cuestionar los actos administrativos objeto de control, con todo, como lo estimó el tribunal, ello solo otorga derecho a Segurexpo S.A. para reclamar la nulidad parcial del acto, precisamente porque las obligaciones no eran solidarias y bien podía reclamársele su parte sin la comparecencia del coasegurador.”*

Por consiguiente, al momento de resolver lo concerniente a mi procurada y en el hipotético caso en que se demuestre una obligación de indemnizar a su cargo, deberá tenerse en cuenta que la póliza de seguro antes referida fue tomada en coaseguro. En virtud de lo anterior, es claro que mi procurada y las aseguradoras citadas, acordaron distribuirse el riesgo según los porcentajes señalados, sin que pueda predicarse una solidaridad entre ellas y limitándose la responsabilidad de las mismas en proporción con el porcentaje del riesgo asumido. **Así las cosas, solicito se tenga en cuenta el porcentaje asumido por mi representada, el cual asciende al 35%.**

**C). LÍMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA No. 420-80-994000000054, VIGENTE DEL 24 DE MAYO DE 2018 AL 29 DE MAYO DE 2019.**

Sin perjuicio de los argumentos expuestos, y sin que con ello se esté comprometiendo a mi representada, a fin de manifestar que en el improbable caso en que el despacho considere que sí nació obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora, la misma deberá sujetarse al tenor literal de las condiciones particulares y generales de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000054, cuya vigencia corrió desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2022. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

Al respecto, dispone el artículo 1079 del Código de Comercio que “*El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada (...)*”; por lo que, en el evento de proferirse una condena a mi representada, ésta se verá condicionada a los valores asegurados en el contrato, a los deducibles pactados en el mismo en caso de existir, y de acuerdo con el porcentaje del coaseguro que le corresponde (el 35,00 % correspondiente a aquel que no fue cedido, en virtud del contrato de seguro).

Así entonces, de acuerdo con los artículos 1079 y 1089<sup>5</sup> del Código de Comercio, la responsabilidad máxima del asegurador se limita a la suma asegurada, de manera que ese es el tope de la responsabilidad asumida por la aseguradora, siempre y cuando se compruebe que se cumplió la condición de la que nació su obligación de indemnizar y evidentemente, el daño y la cuantía de este.

En virtud de lo comentado, de acuerdo con la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000054, cuya vigencia corrió desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 29 de mayo de 2019, el valor asegurado en la misma asciende a **SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.000.000.000)** para el amparo denominado Predios, Labores y Operaciones:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
PATRIMONIO DEL ASEGURADO		\$ 7,000,000,000.00		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		7,000,000,000.00		

En conclusión, en caso de condena desfavorable a los intereses de mi procurada, deberá tenerse en cuenta la disponibilidad del valor asegurado, el límite del valor asegurado y el porcentaje de participación en la asunción del riesgo que aceptó mi representada, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C., que en este caso, asciende al 35,00 % como se dijo.

**D). CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 420-80-994000000054-ANEXO 0.**

En las condiciones de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000054-ANEXO 0, vigente del 24 de mayo de 2018 al 29 de mayo de 2019, se establecen

<sup>5</sup> <LÍMITE MÁXIMO DE LA INDEMNIZACIÓN>. Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario.

Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, mas no que es inferior a él.

los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada, y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio asegurativo. Ahora bien, tal como lo señala el artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

*“(…) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.”*

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorpora en la póliza referenciada, barreras cualitativas que eximen al asegurador a la prestación señalada en el contrato, las cuales se conocen generalmente como *exclusiones de la cobertura*.

De lograrse acreditar al menos una de las exclusiones consignadas en las condiciones generales o particulares de la Póliza Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000054 Anexo 0, vigente del 24 de mayo de 2018 al 29 de mayo de 2019, no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada. En consecuencia, en esa hipótesis, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, como quiera que se convino libre y expresamente que tal riesgo no estaba asegurado.

**E). DEDUCIBLE CONTENIDO EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 420-80-994000000054-ANEXO 0, CUYA VIGENCIA CORRIÓ DESDE EL 24 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2019.**

En gracia de discusión y sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que de la hipotética obligación de mi procurada se debe descontar el deducible pactado. Téngase presente señor Juez que el deducible corresponde a la fracción de la pérdida que directamente y por su cuenta el asegurado, en este caso, el Distrito Especial de Santiago de Cali se dispuso voluntariamente a asumir. Por lo tanto, para los propósitos del presente título, en la póliza de responsabilidad civil extracontractual que nos ocupa, se pactó un deducible del siguiente tenor:

DEDUCIBLES  
Cualquier evento excepto gastos médicos: 1% de la pérdida mínimo 1 smmlv.  
Gastos Médicos: Sin deducible

El deducible está legalmente permitido y encuentra su sustento en el artículo 1103 del Código de Comercio. De esta manera, en el hipotético evento en el que mi representada sea declarada

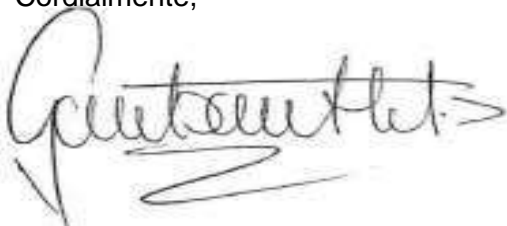
responsable de pagar alguna indemnización a la parte actora en virtud de la afectación del contrato de seguro, resulta de suma importancia que el Honorable Juzgador descuenta del importe de la indemnización, la suma pactada como deducible, expuesta anteriormente **(1% de la pérdida, mínimo 1 smmlv)**.

Sin más consideraciones, elevo las siguientes:

## VI. PETICIONES

Solicito comedidamente al Despacho se sirva denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda en contra del ente territorial asegurado y, consecuencialmente, negar las pretensiones formuladas en el escrito del llamamiento en garantía, ante la falta de acreditación de los elementos axiológicos de la responsabilidad y la inexistencia de obligación indemnizatoria a cargo de mi procurada por no haberse realizado el riesgo asegurado.

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.